

Valdivia, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

### **VISTOS:**

Por sentencia de treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en los autos RIT N° T-15-2022, se rechazó la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido entablada por el ex rector y académico de la Universidad Austral de Chile, don Oscar Alejandro Galindo Villarroel, en contra de la referida casa de estudios superiores, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, reconocida por el Estado. La sentencia del grado sólo acogió la demanda por despido injustificado y prestaciones laborales entablada subsidiariamente, rechazando las pretensiones incoadas por vía principal, en las que se impetraba la indemnización del daño moral sufrido por el actor con ocasión del despido, la declaración de que su despido conculcó los derechos fundamentales que invoca, ordenándose el pago a su favor únicamente de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años servidos, incrementadas en un 80%.

Contra este fallo, ambas partes dedujeron sendos recursos de nulidad invocando diversas causales.

La demandada esgrimió, con carácter principal, el motivo contemplado en el artículo 478, letra c), del Código del Trabajo y, en subsidio, el del artículo 477 del mismo cuerpo legal, en relación con la declaración de despido injustificado. También con carácter subsidiario, en cuanto al monto de lo condenado en materia de indemnizaciones por despido, interpone la causal del artículo 478, letra e), e infracción de ley del citado artículo 477, en lo concerniente al artículo 172; todas disposiciones del citado Código laboral.

El demandante, a su turno, dedujo recurso de nulidad por la causal del artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, tanto por el rechazo de la denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión de su despido, como por la desestimación de la compensación de feriado legal. Conjuntamente hizo valer, en el mismo arbitrio, la causal del artículo 478, letra c), del citado Código, en relación a la desestimación de la acción de tutela antes referida.

Declarados admisibles ambos recursos de nulidad, se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de cada una de las partes.

### **CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que la demandada esgrime como causal principal de su recurso de nulidad, aquella contemplada en el artículo 478, letra c), del Código del Trabajo,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

estimando que su procedencia se determina por la necesidad de alterar la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, a fin de ajustar a derecho el pronunciamiento.

Funda la causal principal en que, pese a establecerse los hechos vertidos en la carta de despido, la sentencia calificó erróneamente de injustificada la desvinculación del actor, señor Galindo Villarroel, amparándose en la necesidad jurídica de reconocerle el derecho ser oído previamente, permitiendo de ese modo su defensa en el contexto del procedimiento previsto en la reglamentación interna de la Universidad y estableciendo, además, todas las responsabilidades concurrentes de otros funcionarios involucrados. Se asila el fallo, igualmente, según refiere la impugnación en análisis, en que el ex rector Galindo Villarroel no ha sido formalizado en la investigación penal, mediando un informe policial que concluye la inexistencia de los delitos denunciados y que debió aplicarse en su contra, preferentemente, alguna de las sanciones menos drásticas que prevé el Reglamento Interno de la Universidad Austral.

En abono del motivo principal, narra el recurso de la demandada que, tal como se lee en la comunicación de despido y se estableció por el *a-quo*, el actor, ejerciendo el cargo de rector de la Universidad Austral de Chile, suscribió personalmente el contrato de trabajo del escultor señor Mario Irrarrázabal Covarrubias, con la finalidad de financiar sus gastos médicos, a sabiendas de que no prestaría servicios, creando de ese modo un cargo nuevo de “experto en arte”, sin autorización del Directorio, como lo exigía el Estatuto de la Universidad en su artículo 29, literal c), dando lugar al pago de más de \$60.000.000 a favor del mencionado artista, sin contraprestación alguna y absteniéndose, al término de su mandato en el mes de enero del año 2021, de exponer la situación al encargado de Museología y al Directorio o al Consejo Académico.

Añade que el artículo 31 del Resolución N° 484 de 24 de octubre de 2016, faculta al rector de la Universidad para poner término al contrato de trabajo correspondiente, tal como procedió respecto del demandante, si los hechos denunciados son de carácter grave y existe prueba suficiente para configurar una causal de terminación, como también ocurrió en la especie.

Expresa que, la falta de sanción a otros responsables, no altera ni excusa la gravedad del proceder del ex rector señor Galindo, sin perjuicio que, además, los restantes intervinientes en la contratación del escultor Irrarrázabal, correspondientes al anterior Director Jurídico y el ex Presidente del Directorio, ya no forman parte de la Universidad, de manera que no es posible establecer sus responsabilidades por las vías previstas en la reglamentación interna.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

En lo demás, se consigna en el arbitrio de la demandada, en apoyo de la causal principal invocada, que el informe policial allegado a la investigación penal es sólo un antecedente más de entre aquellos reunidos en autos, que se presenta un evidente conflicto de intereses en el hecho de contratar como trabajador de la Universidad al representante de la contraparte de ésta en el contrato de comodato celebrado con la Fundación Piedra Viva de Peñalolén, justamente para actuar como experto en arte con miras a cautelar los intereses de la Universidad.

Concluye el recurso que las conductas establecidas en la sentencia respecto del demandante, reúnen la entidad que exige la configuración de los motivos de caducidad del contrato de trabajo de los numerales 1°, literal a) y 7° del artículo 160 Código del Trabajo, invocados por el empleador, al infringirse la buena fe, a través de una contratación subrepticia, sin la debida autorización, que perjudicó a la Universidad en una suma ingente de dinero, al no prestarse servicio alguno a su favor, pese al pago de la remuneración al trabajador contratado de ese modo.

En abono de la primera causal subsidiaria, esto es, la infracción de Ley prevista en el artículo 477 del Código del ramo, expresa el recurso de la demandada que se han vulnerado formalmente los numerales 1°, literal a), y 7°, del artículo 160 Código del Trabajo, junto al artículo 162 del mismo cuerpo legal, al exigir el sentenciador del grado requisitos que los motivos de caducidad del contrato de trabajo referidos, no requieren, ni son exigidos para su debida comunicación al trabajador. De tal suerte, se denuncia por esta causal subsidiaria que el juez del grado se ha abstenido de aplicar los preceptos referidos, al estimar que no concurren las exigencias pertinentes. En efecto, arguye el impugnante que para el establecimiento de las causales de despido referidas, el legislador no ha previsto la investigación sumarial previa que echa en falta la sentencia, bastando la acreditación de los hechos en que se fundan los motivos de despido, incorporados en la comunicación respectiva, enviada de manera formal y oportuna al trabajador; circunstancia que establece el propio fallo como probada en el juicio.

En fundamento de la segunda causal subsidiaria, esto es, la del artículo 478, literal e), por omisión de los requisitos de la sentencia, conforme lo dispuesto en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, se sustenta por el impugnante que el fallo omite el análisis de toda la prueba rendida, arribando a la errada conclusión de que resulta aplicable un pacto de exención de topes legales de indemnización, en base a las siguientes reflexiones que se cuestionan a través del arbitrio: (i) A partir de las aseveraciones de los testigos César Pino Soto y Carlos Carnevali Dickinson no es posible concluir que se hubiere pactado, sin tope alguno, la indemnización por despido que ordena pagar el fallo, desde que los deponentes no narran dicha circunstancia. (ii) En su motivo vigésimo tercero, la sentencia



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

omite analizar el contrato colectivo que vinculó a las partes, cuya cláusula 3.2.8 establece un beneficio denominado “*Plan de Retiro, Renovación y Fortalecimiento de la Planta Académica, Planta Técnico Académica y Planta Adjunta*”, que nada establece sobre la exención del tope en los despidos. Añade el recurrente que, asimismo, el Decreto de Rectoría N° 053/2016 contiene un plan de retiro en condiciones más ventajosas, pero nada establece para el caso de despido, pues exige que los docentes se acojan al plan de retiro que establece la norma, según la citada cláusula 3.2.8 aludida.

Finalmente, en abono de la tercera y última causal subsidiaria que esgrime el recurso de la demandada, esto es, la infracción de ley que contempla el artículo 477 del Código del Trabajo, se argumenta que las indemnizaciones sustitutiva, por años de servicio y recargo del 80%; se establecen infringiendo el artículo 172, inciso final, del citado cuerpo legal, esto es, sin atender al límite máximo de 90 unidades de fomento de remuneración como base para su cálculo, de manera que las referidas indemnizaciones se han determinado excediendo los márgenes legales, al dejar de aplicar la limitante referida.

Estima que la presente vía de ineficacia es la única forma de subsanar los vicios alegados, solicitando que se anule la sentencia, dictando una de reemplazo que rechace la demanda y prestaciones pedidas o, en subsidio, las reduzca aplicando los márgenes previstos para su determinación.

**Segundo:** En lo concerniente a la impugnación del demandante, en fundamento de la causal de nulidad del artículo 478, literal e), por omisión de los requisitos de la sentencia, conforme lo dispuesto en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, se sustenta que el fallo omite el análisis de toda la prueba rendida. Esta causal se desglosa en dos capítulos. En primer término, se denuncia que la sentencia explica que no hay probanzas respecto del feriado legal y proporcional demandado, rechazándolo sin motivos que conduzcan a esa conclusión y alterando la carga de la prueba, contenida en el artículo 1698 del Código Civil. De tal suerte, al decir del recurrente, el sentenciador pierde de vista que el feriado es un derecho irrenunciable del trabajador, previsto legalmente. Luego, en concepto de quien impugna, es la parte demandada la que debe probar, al término de la relación laboral, que otorgó el feriado o lo compensó en dinero.

Narra el arbitrio del actor que la demandada, al contestar el libelo pretensor, negó que el trabajador tuviera derecho a feriado, pero reconoció adeudarle la suma de \$7.196.748 por este rubro y, además, durante el juicio, incorporó bajo en numeral 10 de su prueba documental un “Registro de vacaciones del demandante”; aparejado con miras a dar cumplimiento al inciso 1° del artículo 67 del Código del Trabajo. De tal manera, en concepto del mencionado recurrente, la ausencia de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

análisis probatorio en que incurre el fallo, derivó en que la negativa de la demandada sobre adeudar esta prestación, resultó desvirtuada por su propia prueba, sin que la sentencia la haya analizado.

En cuanto segundo capítulo de la causal en análisis, sustenta el demandante en su recurso que, al rechazar el daño moral, el laudo desconoce la grave imputación dirigida contra del trabajador, acusándolo de falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que le imponía el contrato de trabajo, expresando, además, que abusó de su posición y cargo como rector, que obró de manera deshonesto, antiética y desleal, ocultando de los controles de la administración de la Corporación hasta esa fecha, los hechos imputados. En este ámbito, según alega el impugnante, están los hechos vertidos en la carta de despido, el informe de la Policía de Investigaciones, emitido en la indagatoria penal a cargo del Ministerio Público, la querrella por los delitos de administración desleal y de apropiación indebida por distracción, entablada por la Universidad Austral de Chile en contra del trabajador, que dio origen a la investigación criminal, las publicaciones de prensa posteriores al despido por parte del rector Hans Richter Becerra en radio Bío-bío y del Consejo Académico en prensa escrita. Según concluye en este punto el arbitrio de nulidad, pese al descrédito inferido al actor y los padecimientos que se le causaron, los motivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la sentencia omiten el análisis de todos los medios de prueba incorporados al juicio por las partes.

Finalmente, en lo que toca a la causal de nulidad del literal c) del artículo 478 del Código del Trabajo, aduce el impugnante que la sentencia se asila en la corrección formal del despido que sufrió el actor para descartar la concurrencia de elementos suficientes para establecer una discriminación arbitraria, un atentado a la indemnidad del señor Galindo Villarroel o una represalia del empleador en su contra; rechazando la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. Agrega que, sin embargo, de las circunstancias en que el pronunciamiento del *a-quo* sustenta la ausencia de justificación del despido, se obtienen los indicios de su carácter discriminatorio, esto es, que el único sancionado por los hechos indicados en la carta de desvinculación fue el trabajador, pese a que participaron otros funcionarios de la Universidad Austral de Chile en la gestación y cumplimiento por dos años del contrato de trabajo de don Mario Irarrázaval Covarrubias, esto es, el Presidente del Directorio de la referida casa de estudios superiores y el Director Jurídico de esa época.

Solicita que se acoja el recurso, anulando el fallo y dictando uno de reemplazo que acoja la demanda por daño moral, la denuncia por vulneración de derechos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

fundamentales o, en subsidio, la demanda por despido injustificado, en todas sus partes, ordenando el pago de las prestaciones laborales reclamadas, con costas.

**Tercero:** Que, se encuentra zanjado en el pronunciamiento de la instancia, según se lee en su motivo décimo cuarto del fallo que se revisa, que la controversia suscitada entre las partes no se extiende a los hechos en que se funda el aviso de término de contrato remitido al actor. Se trata, en suma, de circunstancias afirmadas por la demandada para fundar la desvinculación del señor Galindo Villarroel en la referida misiva, que no son discutidas de manera sustancial por la defensa letrada del mencionado trabajador en la demanda que entabló, tanto en la acción principal como en la deducida con carácter subsidiario.

Asentada esta premisa relativa al consenso fáctico que tuvo lugar en los márgenes de la instancia, conviene precisar los hechos fundamentales que no son controvertidos por las partes y que, de consiguiente, se encuentran establecidos en la sentencia del grado. Estos corresponden, en lo que interesa al análisis que sigue, a los siguientes:

a) El actor ingresó a prestar servicios para la demandada bajo dependencia y subordinación el día 1 de agosto del año 1994, desempeñándose como docente, investigador y en cargos de administración universitaria, alcanzando el cargo académico administrativo de Rector de la Universidad Austral de Chile, el que ejerció entre el 1 de julio de 2014 y el 18 de enero de 2021. La relación laboral se pactó con carácter indefinido a partir del año 1996 y concluyó por despido del 18 de noviembre de 2021. La remuneración mensual del actor al momento de la terminación del contrato ascendía a la suma de \$4.073.631.

b) El demandante acordó con el prestigioso escultor don Mario Irarrázabal Covarrubias, la construcción del denominado “Museo Humano” de Isla Teja. En este contexto, se acordó que el mencionado escultor dejaría en comodato por 30 años su colección de cientos de esculturas de alto valor artístico y económico a favor de la Universidad. La iniciativa, bajo la forma de un contrato de comodato, fue aprobada por el Directorio de la Universidad Austral de Chile, con un impacto mediático de envergadura, tratándose de un proyecto de gran importancia nacional e internacional.

El respectivo contrato de comodato fue celebrado por escritura pública de 20 de agosto de 2019, en la que comparece, en representación de la Universidad Austral y en calidad de rector, el demandante, como parte comodataria, y en cuanto parte comodante, figura la Fundación Piedra Viva, representada por Mario y Jaime, ambos Irarrázabal Covarrubias.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

En acuerdo adoptado por el Directorio se aprobó el contrato de comodato celebrado con Fundación Piedra Viva Peñalolén, para la instalación del “Museo Humano” en el Campus de los Museos de Isla Teja, que albergaría la colección escultórica del artista referido, autorizando la inversión de “M\$1.500.000” para el diseño y construcción de la infraestructura requerida para la instalación del referido Museo Humano.

c) El día 1 de agosto del año 2019, se celebró un contrato de trabajo entre la Universidad Austral de Chile y el escultor Mario Irrázabal Covarrubias, de carácter indefinido, por una remuneración mensual bruta ascendente a \$2.297.071. El trabajador fue adscrito a la categoría profesional para desempeñar el cargo de Experto en Arte en la Dirección Museológica de la Corporación. El contrato fue suscrito, en calidad de representante de la parte empleadora, Universidad Austral de Chile, por el rector de la época, el demandante señor Galindo Villarroel, sin contar con autorización del Directorio, con el propósito de que el trabajador pudiera cubrir sus gastos médicos.

Mario Irrázabal Covarrubias quedó sometido a una jefatura dentro de la Universidad, específicamente al Director de Museología. Esta circunstancia involucraba que se le impartieran instrucciones y se le encomendaran tareas, sin que conste que dicha facultad se hubiere ejercido de alguna forma, cualquiera sea ésta, ni de consiguiente, que el trabajador se hubiere negado a realizar las labores encomendadas, en el curso de toda la contratación.

d) En el mes de octubre del año 2021, el Director de Museología de la Universidad Austral se percató de la existencia del referido contrato de trabajo celebrado por la Universidad con Mario Irrázabal Covarrubias, solicitando información a la Dirección Jurídica de la casa de estudios superiores, la que indicó desconocer el hecho, expresando que se trataba de un proceso de contratación irregular. Frente a estos antecedentes, la Dirección referida recopiló elementos adicionales que fueron entregados al rector señor Richter Becerra. El mencionado rector, absteniéndose de ordenar una investigación, pasó al señor Galindo Villarroel al Consejo Académico; organismo que determinó, frente a lo expresado por el Director Jurídico, aprobar su despido. La terminación por despido del contrato del actor se materializó el día 18 de noviembre de 2021. Este proceder se encuentra previsto en la normativa interna como una situación excepcional, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de Investigaciones Internas de la Universidad de 2016, en el sentido que el precepto no exige incoar un sumario tratándose de un caso de gravedad que involucre a un académico, existiendo prueba suficiente para la terminación del contrato, bastando para este efecto, la aprobación previa del Consejo Académico.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

**Cuarto:** Que, por su parte, el juez *a-quo* formula las reflexiones que acto seguido se indican, en torno a los hechos que establece en su sentencia con el propósito de fundar la conclusión a que arriba en orden a no haberse configurado un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo ni una falta de probidad en el desempeño de las funciones del actor.

Así, concluye el fallo, según se expresa en sus motivos décimo cuarto, décimo sexto; vigésimo y vigésimo segundo, que los hechos reseñados en el motivo tercero precedente de esta sentencia, no son graves como se presentan *a priori*, al punto de que se haya desvinculado al demandante por decisión rectoral, sin un sumario administrativo que permitiese aclarar las circunstancias denunciadas, sus partícipes y responsables, luego de transcurridos dos años desde la verificación de los hechos. A mayor abundamiento, expresa el pronunciamiento impugnado en su motivo vigésimo primero que, aun cuando fuere responsable el señor Galindo Villarroel de los hechos establecidos, se le ha aplicado la máxima sanción, sin que obren antecedentes de investigaciones previas en su contra o sanciones anteriores.

No puede soslayarse en este punto que los razonamientos de la sentencia se contradicen en el sentido que a continuación se indica:

a) Sobre el marco fáctico, establece el fallo como hechos probados, aquellos vertidos en la carta de despido, refiriendo su alto grado de probabilidad, pero luego reflexiona en orden a que éstos deben entenderse como no demostrados al no desplegarse el procedimiento interno de la Universidad fruto de cuya aplicación a este caso, debieron darse por probados. Así, es dable concluir de la dicción del motivo décimo séptimo del fallo que se revisa una ostensible contradicción, al estimar probados y no acreditados, al mismo tiempo, determinado hecho fundamental para elucidar el pleito.

b) Sobre la significación y entidad de los hechos que establece, conforme la carta de despido, incurre también en una manifiesta aporía la sentencia del grado. En efecto, se expresa en el basamento décimo octavo que la conducta atribuida al señor Galindo Villarroel en la carta de despido, consistente en la contratación del escultor sin la venia del Directorio —que el fallo en alzada señala como “contrato separado del de comodato”— corresponde a una actuación errada o incluso negligente, pero luego se afirma, como se dijo, que su índole no está suficientemente establecida. En el aspecto de la valoración de la conducta, la sentencia entra en una contradicción manifiesta, asentando al mismo tiempo un incumplimiento contractual de entidad, para luego aseverar que esta circunstancia no se demostró.





En las condiciones apuntadas, el pronunciamiento del grado incurre en una violación manifiesta del principio de identidad en el ámbito de la lógica formal; circunstancia que bastaría para ejercer la competencia invalidatoria del laudo de que trata el artículo 479, inciso final, del Código del Trabajo, al verse desprovista la sentencia de las reflexiones que sustenten lo concluido, desde que la contraposición de las existentes impiden concluir lo contrario. Estos razonamientos en colisión, además, versan sobre el núcleo de la discusión habida entre las partes acerca de la justificación del despido y sus circunstancias.

Ahora bien, asumiendo que la tesis del fallo es aquella que deriva en el acogimiento de la demanda subsidiaria por despido injustificado que se lee en su sección dispositiva, debe entenderse que el laudo rechaza la concurrencia de alguno de los motivos de caducidad invocados por el empleador al no haberse establecido, a través del procedimiento investigativo que debió aplicarse, los hechos que se invocan para su configuración. Además, a juicio del laudo impugnado, la improcedencia del máximo ejercicio del poder patronal disciplinario resulta de la circunstancia que, aun cuando se hubieren establecido los hechos narrados en la comunicación de despido, no se dispuso una medida menos drástica frente a un trabajador con un desempeño intachable. En este escenario, nuevamente no aparece claro si la estimación de la demanda obedece a un déficit probatorio o a un reproche al rector en ejercicio de la Universidad Austral por la omisión de incoar un procedimiento investigativo o sumarial. Por ende, las contradicciones hasta aquí constatadas dejan sin fundamento a la sentencia en alzada, configurando un motivo relevante que autoriza su anulación oficiosa, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 479, inciso final, 2ª parte, en relación con el artículo 478, literal e), del Código del ramo, como se resolverá en la conclusión.

**Quinto:** Que, sin perjuicio de configurarse un motivo que autoriza la declaración de nulidad de oficio del pronunciamiento del grado, aparece del todo pertinente resolver la contienda jurídica planteada vía nulidad en el motivo principal esgrimido por la demandada en su recurso, concerniente a la infracción de ley que denuncia, al tratarse del núcleo de la discusión habida entre las partes. De esta discrepancia se hace cargo el sentenciador, pero incurriendo en la insuperable aporía constatada en el motivo que precede de este fallo, sin conseguir zanjarla en el ámbito de lo que se espera de una reflexión judicial.

Al efecto, debe considerarse que el recurrente cuestiona la entidad del incumplimiento obligacional establecido en la sentencia que se revisa, asilándose en la contratación por parte del demandante, señor Galindo Villarroel, mientras ejerció el cargo de rector de la Universidad Austral de Chile, del escultor don Mario



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

Irarrázabal Covarrubias. Se imputa al actor haber procedido de manera subrepticia, sin la debida autorización y perjudicando patrimonialmente a la Universidad al no prestarse servicio alguno a su favor, pese al pago de la remuneración al trabajador contratado de ese modo.

**Sexto:** Que, los Estatutos de la Corporación Universidad Austral de Chile, regulan las funciones del rector y los cuerpos colegiados superiores de la casa de estudios que dicha normativa establece. Entre estas competencias, según discurre el artículo 29, literal c), del mencionado instrumento normativo, corresponde al Directorio aprobar el nombramiento y contratación del personal académico y de administración y servicios, que no esté contemplado en el presupuesto anual. En este marco, una vez aprobado el presupuesto a instancia de una Comisión de Presupuesto integrada por miembros del mismo Directorio, se le ha conferido una estructura subsecuente para la contratación del personal, esto es, se ha previsto según el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Personal de la Universidad Austral de Chile, una garantía presupuestaria para estos vínculos obligacionales, en el sentido que la expensa debe estar claramente contemplada en el presupuesto anual.

En el sentido apuntado, la normativa interna contenida en el artículo 3° del mencionado Reglamento, encomienda a la Dirección de Personal el proceso de contratación, exigiendo la aprobación de la Vicerrectoría y la comprobación previa de que existen los recursos financieros necesarios para solventarla.

Estas previsiones, como puede colegirse, limitan los poderes con que cuenta el rector de la Universidad para contratar y obligarla en su calidad de representante de la Corporación. Por ende, acorde la organización interna de la Universidad, se está frente a un importante constreñimiento a la gestión encomendada al rector, consistente en la exigencia de autorización por parte del Directorio para asumir obligaciones de aquellas que exijan imputación presupuestaria. Específicamente, en el caso de la contratación de trabajadores, estas cortapisas tienen como envés controles a cargo de una dualidad de órganos, a saber, la Dirección de Personal y la Vicerrectoría.

**Séptimo:** Que, según fue establecido unívocamente en la instancia, el denunciado no requirió la debida autorización del Directorio, ni solicitó posteriormente la venia de este cuerpo colegiado de gobierno universitario para proceder a la contratación de los servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia, con carácter indefinido, de don Mario Irarrázabal Covarrubias, a partir del 1 de agosto de 2019. Se abstuvo, además, de recabar el pronunciamiento u homologación de la Dirección de Personal y de la Vicerrectoría, que resultaban mandatorios a la luz de la regulación interna a que debía someterse.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

Este contrato de trabajo produjo sus efectos escalonadamente, habida cuenta de su índole, hasta la fecha de su terminación pactada con el trabajador. Conviene recalcar que, para su celebración, estaba prevista como diligencia primordial e indispensable, la conformidad del Directorio. Esta aprobación y los demás trámites que debían reunirse para su otorgamiento, exigían verificar la imputación a un ítem presupuestario previamente definido, en términos que la obligación asumida debía contar llanamente como la ejecución del presupuesto del año 2019 y no como una suerte de ampliación o alteración presupuestaria *ad-hoc*.

En el caso del escultor antes referido, sus remuneraciones sólo podían imputarse al presupuesto del año siguiente a su contratación, vale decir, a aquel que admitía la inclusión de los gastos que acarreaba, atinentes, en lo medular, al pago de remuneraciones mensuales y prestaciones en materia de seguridad laboral.

**Octavo:** Que, el mencionado contrato de trabajo convenido con el escultor señor Irrarrázabal Covarrubias, le asignó en su calidad de trabajador dependiente una función en el ámbito del proyecto del “Museo Humano” de la Isla Teja. Este proyecto formaba parte de la propuesta del “Plan Maestro de Museos” informada al Directorio el año 2018. Sin embargo, en esta iniciativa, estaban descartadas formas específicas de vinculación jurídica para con la Universidad Austral de Chile, ajenas al objeto del comodato, entre ellas las de índole laboral, al punto que en el presupuesto aprobado sólo se contemplaban gastos de traslado y alojamiento del artista referido, para permitirle ejercer sus poderes contractuales de supervisión en la ejecución del proyecto, según el referido contrato de comodato pactado.

En tal sentido, por parte del Directorio siempre se consideró la gratuidad de las obligaciones que asumía el escultor señor Irrarrázabal Covarrubias, comprensiva de sus requerimientos de supervisión o control para la correcta exposición de su trabajo, junto a la promoción de sus obras. Luego, mal podría comprenderse como un medio implícito para la ejecución cabal del comodato, la contratación del escultor según el régimen del contrato individual que prevé el Código del Trabajo.

**Noveno:** Que, las decisiones que adoptó el Directorio de la Corporación de la Universidad Austral de Chile, en relación al “Museo Humano” de Isla Teja y la iniciativa de un plan maestro para el Campus de la Cultura, se limitó a aprobar un proyecto que tenía como objeto la cesión a título gratuito del patrimonio escultórico de Mario Irrarrázabal Covarrubias, cuyas condiciones puntuales debían formalizarse y contar con la venia del mencionado organismo directivo.

En estos linderos, se aprueba el contrato de comodato con la Fundación Piedra Viva en julio del año 2019, que contempla la adquisición gratuita de toda la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

colección escultórica del artista Mario Irarrázabal Covarrubias por parte de la Universidad Austral de Chile, autorizándose un gasto de 1.400 millones de pesos, más 100 millones de pesos para financiar el proyecto de arquitectura y especialidades. En el contrato de comodato se acordó que, la entrega material de la colección del artista, tendría lugar una vez que se construya el museo humano en el campus de los museos de Isla Teja, que se proyectaba erigir. Se pactó que el artista Mario Irarrázabal Covarrubias debía participar aprobando la decisión de los especialistas que contratara la Corporación de la Universidad, en la instalación de la colección, diseño del pabellón, museología, paisajismo, arborización, e iluminación. La Universidad se obligaba a las obras y gestiones referidas, y al traslado y alojamiento, inclusive para las actividades de difusión, del artista, de modo de permitir su vigilancia. Al efecto, se aprobó un Plan de Inversiones de los años 2020 y 2021, por un total de 1.500 millones de pesos.

**Décimo:** Que, en el contrato de comodato pactado con la Fundación Piedra Viva de Peñalolén, el artista señor Irarrázabal Covarrubias asumió una labor de control en la instalación de su colección escultórica, diseño del pabellón que la albergaría, museología, paisajismo, e iluminación del recinto. Sin embargo, en su contrato de trabajo se obligó a desempeñar la labor de experto en arte en el futuro museo humano a construirse en el Campus de los Museos de Isla Teja. De tal suerte, en el vínculo laboral reseñado se prevé con mayor laxitud su rol en el proyecto descrito, apareciendo relevante sobre este punto la alteración de la naturaleza de su aporte para el bien de esta empresa universitaria. En efecto, desde una función dirigida a amparar los intereses artísticos del señor Irarrázabal Covarrubias, acerca del modo y condiciones en que sería expuestas y difundidas sus creaciones plásticas, se transita hacia un vínculo laboral caracterizado por el sometimiento al poder de dirección de la Universidad Austral de Chile, en la mencionada exposición pública y difusión.

Se cierne para la negociación del Museo Humano, en las condiciones planteadas, un riesgo de conflicto entre el rol procurante del artista sobre sus intereses propios, que emana del comodato, versus su desempeño por cuenta ajena y bajo subordinación para la Universidad Austral. Por ende, la contratación efectuada por el demandante no favorece la ejecución del contrato de comodato, sino que más bien conspira en contra de sus previsiones, entabando su ejecución de cara al rol que asignó al escultor. De ello se colige, como lo hace el *a-quo*, que la contratación laboral ampara más bien el acceso del artista a un seguro legal de salud, distanciándose notoriamente de la correcta ejecución del comodato convenido con la Fundación Piedra Viva y que contó con la venia del Directorio de la Universidad Austral.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

En suma, según el contrato de comodato referido, don Mario Irarrázabal Covarrubias intervendría en un rol de carácter estético y técnico para resguardar el valor de su obra. Como contrapartida, se obligaba la Universidad a tolerar, colaborar y favorecer con traslados y alojamiento, esta función de acompañamiento y control en pro de los intereses artísticos del señor Irarrázabal Covarrubias, para la mejor lograda exhibición de su trabajo escultórico. Luego, esta previsión contractual convenida a favor del artista, cuya obra sería presentada en un museo especialmente dedicado, no implicaba, en modo alguno, la creación de un puesto de trabajo a su favor, previéndose expresamente los únicos desembolsos que podía ocasionar la facilitación o cooperación contractual con su rol en el comodato, los que se limitaban, en lo aprobado por el Directorio, a expensas de traslado y alojamiento del artista, como se dijo.

**Undécimo:** Que, la contratación laboral del artista Irarrázabal Covarrubias se verificó cuando se encontraban aparejándose los elementos que debían reunirse para el diseño y edificación del Museo. Precisamente por no estar contemplado en el presupuesto del año de la contratación ( i.e. 2019), el demandante, en su calidad de rector de la Universidad, le indicó al Director de Personal que creara una partida o glosa presupuestaria e incluyera la remuneración del trabajador señor Irarrázabal Covarrubias en los sucesivos presupuestos anuales a nivel central, para de ese modo confirmar financieramente la duración indefinida de su contrato de trabajo y, de tal suerte, la creación de un nuevo cargo en la Universidad que vino en denominar “encargado de arte”. Las remuneraciones pactadas se devengaron y pagaron con normalidad hasta la terminación por mutuo acuerdo de las partes en la convención de índole laboral.

En tales condiciones, el rector señor Galindo Villarroel procedió exorbitando sus atribuciones, absteniéndose no sólo de requerir la aprobación del Directorio, sino obrando en contra de su designio y vulnerando abiertamente los Estatutos de la Universidad que estaba llamado a cumplir según su contrato de trabajo, contraviniendo, además, la normativa presupuestaria aplicable, desvaneciéndose las garantías de control que consultan sus previsiones.

**Duodécimo:** Que, conforme el contrato de trabajo de personal académico de 29 de agosto de 1995, convenido entre las partes del juicio, el actor se obligó a someterse a los estatutos de la Universidad Austral de Chile, asumiendo progresivamente labores de administración académica a través de anexos de contrato, que implicaban la satisfacción de un deber contractual primigenio de observancia de la reglamentación universitaria. Los cargos de administración académica a los que fue progresivamente accediendo el señor Galindo Villarroel, hasta alcanzar el pináculo de esta carrera, no constituyen áreas de no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

interferencia, ajenas a los deberes contractuales que asumió el actor, máxime si la carrera profesional que abrazó al interior de la Universidad Austral, como se dijo, tuvo como eje fundamental el ejercicio de cargos y responsabilidades de la referida índole de administración académica, según consta del historial de los anexos a su contrato. En suma, se trata de la conducción del contrato de trabajo del actor a través de décadas, hacía la función docente-directiva, de la índole de aquella que trata, por ejemplo, el artículo 7° de la Ley N° 19.070.

En este contexto, las reflexiones precedentes permiten concluir que la contratación laboral del escultor tantas veces referido, sin amparo del Directorio, gestionaba un proyecto diverso al que éste órgano aprobó, correspondiente más bien a un desarrollo de museología en concomitancia con el artista señor Irarrázabal Covarrubias, haciendo caudal de su talento para el bien de la Universidad y no para el resguardo de sus criterios estéticos, como se planteó en el comodato pactado con la Fundación Piedra Viva de Peñalolén. Se trató entonces de una auténtica reformulación del Proyecto que, aunque pudiese estimarse favorable como desliza el fallo en alzada, requería de la aprobación del Directorio y la habilitación presupuestaria de los órganos correspondientes, a saber, de las comisiones financieras del Consejo Académico, del Directorio de la Universidad y su promulgación rectoral. Sólo por esa vía podía satisfacerse, sin desviación del propósito y del presupuesto aprobado por el Directorio, el afán del señor Galindo Villarroel de brindar cobertura de salud al escultor señor Irarrázabal Covarrubias.

Ahora bien, de estimarse que este resguardo era una condición favorecedora o promotora del Museo, abordarla exigía la reformulación del Proyecto, alterando el rol del escultor, incluso implicándolo en la operación rutinaria de la exhibición escultórica, despojándolo de sus poderes para modular el diseño arquitectónico y constructivo del museo que emanaban del comodato celebrado con la Fundación Piedra Viva de Peñalolén.

Por otro lado, mal podría sustentarse que, al aprobarse un financiamiento cuantioso para el diseño de arquitectura y especialidades por decisión del Directorio de la Universidad, los recursos disponibles podían utilizarse con discrecionalidad u holgura suficiente para cobijar la contratación del señor Irarrázabal Covarrubias. Esta perspectiva no se condice con la regulación del presupuesto de la Universidad, previsto como una herramienta fundamental de distribución y control de los recursos financieros cuya inobservancia pone en serio riesgo la estabilidad financiera de la institución. En este ámbito, no puede soslayarse que, como se dijo, no había siquiera presupuesto que estuviere contemplado desde agosto del año 2019 —fecha del inicio de las labores del trabajador— para remunerar al escultor señor Irarrázabal Covarrubias.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

**Décimo tercero:** Que, no está establecido en los hechos fijados en la instancia que de las estipulaciones del contrato de comodato o de alguna otra circunstancia o sugerencia, derivara la habilitación o venia del Directorio de la Universidad que se echa en falta en el motivo que precede. Como se dijo, no hay permisión implícita y, de las estipulaciones del comodato, sólo cabe concluir la incompatibilidad de lo pactado con la vinculación laboral que se fraguó a espaldas del Directorio de la Universidad.

En efecto, se pacta y escritura el contrato de comodato para plasmar la voluntad del referido Directorio; organismo que aprueba lo contratado, trazándose de ese modo márgenes claros a los que debía someterse el Rector en la ejecución del Proyecto de “Museo Humano” de la Isla Teja. En estas condiciones estatutarias, se controlaban los poderes y las decisiones de gestión del rector en la contratación del personal. Haber fraguado un vínculo laboral, separado del comodato y sin que éste le sirviera de antecedente para convenirlo, no se conforma en modo alguno con lo que fue autorizado por el Directorio desde que su decisión se limitó a aprobar las cesiones gratuitas de las obras del escultor señor Irrázabal Covarrubias y los costos de construcción del museo, comprensivas del diseño de arquitectura y especialidades, con cargo a los presupuestos de las siguientes anualidades, esto es, de los años 2020 y 2021.

**Décimo cuarto:** Que, en el marco del ejercicio de labores de dirección académica concernientes al cargo de rector que ostentó el demandante, según consulta el artículo 47 de los Estatutos de la Universidad Austral de Chile, éste actuó fuera de sus competencias al contratar bajo subordinación y dependencia al escultor señor Irrázabal Covarrubias, tanto por no contar con la aprobación del Directorio de la casa de estudios superiores referida, como por tratarse de un gasto que no estaba financieramente contemplado en el presupuesto de 2019 y sucesivas anualidades.

En suma, ejerciendo la máxima autoridad de que se encontraba investido y la representación legal de la Corporación, el actor señor Galindo se apartó de los límites previstos para su gestión, contrariando, además, el propósito de las actuaciones que debía ejecutar según lo ordenado por el Directorio, tanto al invertir al artista mencionado de la calidad de trabajador dependiente de la Universidad en calidad de experto en artes a la Dirección de Museología, ligándolo a ésta por un vínculo indefinido y comprometiendo, a la par, tanto la gratuidad del comodato de esculturas que debía concretarse como el rol reservado a favor del artista.

Las circunstancias reseñadas comportan una infracción a los deberes contractuales del actor en materia de dirección, de carácter grave, no sólo al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

desconocer, sino que al contrariar frontalmente la decisión de un cuerpo colegiado de gobierno de la Universidad.

Conviene subrayar que es deber primordial del rector, en cuanto máxima autoridad universitaria, respetar las potestades de los órganos colegiados de gobierno universitario. Esta observancia entraña un umbral infranqueable en la adopción de decisiones que para la propia Universidad Austral de Chile, según el rol fundacional que se ha autoimpuesto, son de responsabilidad pública. La vinculación laboral tantas veces aludida, manifiestamente impuso a la Corporación un haz de deberes contractuales y legales y, además, alteró el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, tratándose de una situación imputable al actor, tal como fue reseñada en la carta de despido.

**Décimo quinto:** Que, conforme las reflexiones plasmadas en los motivos que preceden, se configura en la especie la causal de caducidad del contrato de trabajo que prevé el artículo 160 n° 7 del Código del ramo, encontrándose justificado el despido del demandante a la luz del reseñado motivo, acorde los hechos invocados en la respectiva carta; pacíficos entre las partes. Al estimar no configurado esta causal de término unilateral, yerra el sentenciador, apartándose de los componentes valorativos que consulta la disposición y absteniéndose de aplicarlos a un caso en que debió hacerlo.

Por el contrario, la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones en que se asiló la demandada para desvincular al actor, según también se consigna en la comunicación de término, no se configura. En efecto, las gestiones del señor Galindo Villarroel, aunque desconocen el radio de acción de los órganos universitarios de gobierno y la legitimidad en el ejercicio de sus propios poderes de representación de la casa de estudios superiores, fueron realizadas en beneficio del proyecto de museo que impulsaba para erigir un Campus de la Cultura en la Universidad. No se advierte en su actuar, de tal manera, un afán de hacerse en beneficio propio de caudales, recursos o haberes de la Corporación, sino más bien el haberse desembarazado del método y las formas indispensables para la adopción de decisiones que envuelven compromisos financieros. Luego, haber desvirtuado el Proyecto se vio motivado por el afán de alcanzar la mejor versión que, desde su errada perspectiva, podía dispensar el contrato de comodato. Esto no reconoce justificación plausible desde la perspectiva de la satisfacción de sus obligaciones basales en materia laboral, específicamente de dirección y gestión docente, pero no constituye una falta de honradez u honestidad en el sentido de que trata el artículo 160 N° 1, literal a), del Código del Trabajo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST



**Décimo sexto:** Que, en las condiciones plasmadas en las reflexiones que preceden, la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio que se denuncia por la causal principal esgrimida por la demandada en su recurso de nulidad, desde que el incumplimiento en que incurrió el trabajador de sus obligaciones laborales debe calificarse de la entidad necesaria para autorizar el ejercicio del máximo poder disciplinario del empleador, por lo que el recurso de nulidad debiese prosperar al tratarse de un vicio que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al acoger una demanda por despido indebido que era del todo improcedente.

**Décimo séptimo:** Sin perjuicio que, como se dijo, debiese prosperar la nulidad alegada por la demandada en el motivo principal de su recurso, lo cierto es que asentada la procedencia de la invalidación de oficio del laudo que se revisa, según lo razonado en el motivo cuarto de este fallo, en lo resolutivo se declarará dicha consecuencia, omitiendo pronunciamiento sobre el recurso de nulidad de la demandada, conforme el vicio denunciado a través de la referida causal invocada por vía principal en su impugnación. En tales condiciones, además, resulta inoficioso referirse y ponderar los restantes motivos de ineficacia alegados por ambas partes, por lo que se omitirá también pronunciamiento a ese respecto.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, procediéndose de oficio, **se declara la nulidad de la sentencia** de treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, en los autos RIT. N° T-15-2022, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación y sin previa vista, pero separadamente.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr. Carvajal Schnettler.

**Laboral-Cobranza N° 32-2023.-**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada por Ministro Presidente Rodrigo Ignacio Carvajal S., Ministra Marcia Del Carmen Undurraga J. Valdivia y la Ministra María Elena Llanos M., quien no firma por encontrarse con Licencia Médica, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

En Valdivia, a veintitres de noviembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JXVHXJBXEST